



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, diecisiete (17) de agosto de 2022

### SALA SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL

#### AUTO INTERLOCUTORIO

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL	EJECUTIVO
EJECUTANTE	JUANA YOLIMA PRECIADO QUIÑONES <a href="mailto:notificacionescali@giraldoabogados.com.co">notificacionescali@giraldoabogados.com.co</a>
EJECUTADO	DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI <a href="mailto:notificacionesjudiciales@cali.gov.co">notificacionesjudiciales@cali.gov.co</a> <a href="mailto:angiecal1408@hotmail.com">angiecal1408@hotmail.com</a>
RADICACIÓN	76-001-33-33-007-2019-00299-01
TEMA	PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE EMBARGO Y RETENCIÓN DE DINEROS/ EXCEPCIONES A LA INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
DECISIÓN	CONFIRMA/ DECRETA MEDIDA CAUTELAR

#### 1.- ASUNTO

Procede el Tribunal, en segunda instancia y a través de la Sala Segunda de Decisión Oral, conformada por los doctores **JHON ERICK CHAVES BRAVO**, **FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ** y **RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**, a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte ejecutada, contra el auto interlocutorio del 02 de febrero de 2022 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, por medio del cual se decretó una medida cautelar.

#### 2.- AUTO IMPUGNADO

El día 02 de febrero de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, dictó auto interlocutorio mediante el cual resolvió decretar el embargo y retención de los dineros que el **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI** tenga en las cuentas corrientes o de ahorros de los bancos de OCCIDENTE, BOGOTÁ, SUDAMERIS, BANCOLOMBIA, AGRARIO DE COLOMBIA, POPULAR, AV VILLAS, DAVIVIENDA, BBVA, CAJA SOCIAL y PICHINCHA, limitando la medida a la suma de \$6.032.560.

En la citada decisión, el *a quo* señaló, luego de analizar las disposiciones sobre el decreto de medidas cautelares de embargo y retención de bienes previstas en el Código General del Proceso, que resulta procedente la solicitud de embargo y retención de dineros depositados en cuentas de ahorros y cuentas corrientes que pudiere poseer la ejecutada, conforme a

lo dispuesto en el numeral 10° del artículo 593 del Código General del Proceso y para calcular el monto máximo de la medida, tomó como base los montos que fueron objeto de la liquidación del crédito en firme, esto es, la suma de \$5.745.295, más aquella liquidada y aprobada por concepto de costas en monto de \$287.265, para un límite máximo del embargo, de \$6.032.560.

Finalmente, indicó que no existía en principio motivo para considerar que los recursos potencialmente afectados por el embargo sean de carácter inembargable, pues las entidades financieras destinatarias de la orden debían informar al Despacho, dentro del término de un (1) día hábil siguiente al recibo de la comunicación respectiva, si se trataba de recursos que ostentan tal calidad conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 594 del Código General del Proceso, en cuyo caso se abstendrán de hacer efectiva la medida cautelar<sup>1</sup>.

### **3.- FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN**

Inconforme con esta determinación, el mandatario judicial de la parte ejecutada interpuso el recurso de apelación, señalando que las excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, previstas en la sentencia C-1154 de 2008, con la entrada en vigor del Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no son aplicables o perdieron su vigencia, pues en los numerales 1 y 4 del artículo 594 del estatuto general procesal, en concordancia con el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, no se contemplaron excepciones a la inembargabilidad y por el contrario de la literalidad de los preceptos se puede inferir que no existen excepciones.

De otro lado, señaló que no procede la medida, pues conforme a lo previsto en los artículos 6° de la Ley 179 de 1994, 19 del Decreto 111 de 1996, 195 parágrafo 2° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 594 del Código General del Proceso, los recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación son inembargables; y como los dineros que por todo concepto recibe la entidad territorial están incluidos en dicho instrumento de planificación, no pueden ser objeto de embargo, independientemente de la denominación del rubro presupuestal o de la cuenta bancaria en que se encuentren.

Sustentó además la solicitud de revocatoria de la decisión inicial, en el hecho de que la medida cautelar carece de la especificación del número de la cuenta que sería objeto de la medida, por lo que no se cumplió con el requisito legal de la plena identificación del bien sobre el que recaería la medida cautelar solicitada.

Finalmente, señaló que la medida cautelar dictada tendiente a embargar y retener los dineros que tenga el Distrito Especial de Santiago de Cali en las diferentes entidades bancarias, no es viable, dado que el legalmente obligado al pago de las obligaciones contenidas en la sentencia que se

---

<sup>1</sup> Archivo No. 03 del expediente digital (cuaderno medidas).

soporta como título ejecutivo –prima de servicios Decreto 1042 de 1978- es el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**<sup>2</sup>.

#### **4.- PROBLEMA JURIDICO**

Corresponde a la Sala determinar si el embargo de los recursos depositados en las cuentas bancarias del **DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**, resultaba procedente, por pretenderse a través de este el pago de una acreencia contenida en una sentencia judicial.

#### **5.- TESIS DEL DESPACHO**

La Sala confirmará la decisión de primera instancia, en cuanto decretó el embargo y retención de los dineros que posee la ejecutada en determinadas entidades financieras, al advertir que el presente asunto se trata de la ejecución de una providencia judicial que contiene un crédito laboral en contra del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, y por ello, la solicitud se encuentra dentro de las excepciones que permiten la embargabilidad, relativas a la ejecución de créditos de carácter laboral, o de obligaciones contenidas en sentencias.

#### **6.- CONSIDERACIONES**

**6.1.** El artículo 63 de la Constitución Política consagra la inembargabilidad de ciertos bienes del Estado y faculta al legislador para que determine qué otros activos estatales tienen esa misma naturaleza, así:

*“Artículo 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.*

En ejercicio de dicha potestad, el legislador ha establecido en distintos cuerpos normativos la inembargabilidad de los recursos contenidos en el Presupuesto General de la Nación o los que son girados a las entidades territoriales para inversión social mediante el Sistema General de Participaciones.

Estas disposiciones normativas e incluso algunas de igual contenido proferidas previo a la expedición de la Constitución de 1991, han sido objeto de control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, corporación que ha establecido que, aunque la regla general sea la inembargabilidad de dichos recursos, hay eventos excepcionales en que se debe permitir su embargo.

El primero de esos pronunciamientos fue la sentencia C-546 de 1992, en la que se analizó la constitucionalidad de los artículos 8º parcial y 16 de la Ley 38 de 1989, y se estableció que las normas acusadas se ajustan a la Constitución bajo el entendido de que *“en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo*

---

<sup>2</sup> Archivo No. 06 del expediente digital (cuaderno de medidas).

*de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo".*

Posteriormente, en sentencia C-103 de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de unos apartes del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, *"por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil"*, en el entendido que *"cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes. Pero, expresamente, se aclara que la obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible completar el acto administrativo con interpretaciones legales que no surjan del mismo"*.

Luego, mediante sentencia C-354 de 1997, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que consagra la inembargabilidad de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. En dicha providencia, la Corte señaló que *"los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos"*.

Estos pronunciamientos fueron abordados de manera sistemática en la sentencia C-1154 de 2008, en la que, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 21 parcial del Decreto 28 de 2008, *"por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones"*, se construyó la línea jurisprudencial de la embargabilidad de los recursos públicos y se estableció que, pese a que la regla general sea su carácter inembargable, hay situaciones en las que resulta plausible permitir el embargo. Además precisó que dentro de estas excepciones se encuentran aquellos recursos que tienen destinación específica para inversión social -como los del SGP-, cuando excepcionalmente no haya otras cuentas o recursos que resulten suficientes para garantizar el pago de las acreencias, en aras de garantizar el respeto de otros valores constitucionales como *"el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de efectividad de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo, entre otros"*.

En esa misma providencia, la Corte precisó que la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos es una respuesta a *"la necesidad de armonizar esa cláusula (la de inembargabilidad) con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, por lo que la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el*

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76-001-33-33-007-2019-00299-01
EJECUTANTE:	JUANA YOLIMA PRECIADO QUIÑONES
EJECUTADO:	DISTRITO ESPECIAL DE CALI

*deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada".*

Así las cosas, **la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos se presenta cuando lo que se reclama tiene que ver con i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado.**

En este punto, debe precisarse que estas excepciones mantienen vigente "la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Además, en el caso de la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos emanados de la administración, la posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado".

A pesar de la existencia de un precedente judicial consolidado frente al reconocimiento de tres excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se introdujo nuevamente en el ordenamiento jurídico una disposición rígida sobre el carácter inembargable de dichos recursos, así:

*Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:*

*(...)*

*Parágrafo 2o. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria.*

Por su parte, el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, volvió a consagrar legalmente la inembargabilidad de los recursos incorporados en el presupuesto nacional, así:

*"Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

*1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social(...)."*

Como puede verse, estas disposiciones son materialmente semejantes a los artículos 16 de la Ley 38 de 1989, 1º del Decreto 2282 de 1989 y 19 del Decreto 111 de 1996, sobre las que la Corte Constitucional declaró su exequibilidad condicionada en las sentencias C-546 de 1992, C-103 de 1994 y C-354 de 1997, respectivamente, en los términos señalados en párrafos precedentes.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76-001-33-33-007-2019-00299-01
EJECUTANTE:	JUANA YOLIMA PRECIADO QUIÑONES
EJECUTADO:	DISTRITO ESPECIAL DE CALI

Por tratarse de disposiciones con un contenido normativo semejante al que ya fue analizado por la Corte Constitucional en las providencias que consolidaron el precedente que establece excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, dicho criterio jurisprudencial se mantiene incólume y condiciona la interpretación constitucional adecuada de los nuevos preceptos legales, en el sentido de reconocer la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, pero aceptando que hay tres excepciones relativas a la ejecución de créditos de carácter laboral, o de obligaciones contenidas en sentencias o títulos ejecutivos emanados del Estado, las cuales permiten el embargo excepcional de dichos recursos, siempre que la obligación ejecutada se encuadre en alguna de ellas y que, en el caso de embargo de recursos que tienen destinación específica, se haya constatado que con el embargo de otros recursos de la entidad deudora no se logre cubrir la totalidad de la acreencia.

Esta postura también fue sostenida por el Consejo de Estado<sup>3</sup> en auto del 8 de mayo de 2014, en la que se señaló:

*“En síntesis, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado, para lo cual debe acudir al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso.*

*Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral”.*

A igual conclusión llegó el Consejo de Estado en providencia del 28 de abril de 2021, al expresar que una de las excepciones a la regla general de inembargabilidad, *“es cuando se soliciten medidas cautelares dentro de un proceso ejecutivo que tenga como título una sentencia aprobada por esta jurisdicción”*<sup>4</sup>.

**6.2.** Con las precisiones efectuadas en párrafos precedentes, pasa la Sala a estudiar si el presente asunto había lugar a decretar la medida cautelar.

En el *sub examine*, la ejecutante solicitó el embargo y retención de los dineros que posea el **DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**, como titular, en las cuentas corrientes o de ahorros, que se encuentren a su nombre en las entidades financieras, BANCO DE OCCIDENTE, BOGOTÁ, SUDAMERIS, BANCOLOMBIA, AGRARIO DE COLOMBIA, POPULAR, AV VILLAS, DAVIVIENDA, BBVA, CAJA SOCIAL y PICHINCHA.

El juez *a quo* decretó el embargo y retención de los dineros, estableciendo el límite de la medida y realizando las advertencias frente a la aplicación del artículo 594 del Código General del Proceso.

---

<sup>3</sup> Esta providencia fue proferida por la Sección Cuarta, dentro del proceso con radicado 19717, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 28 de abril de 2021, expediente 66.376.

Como en este evento se trata de la ejecución de una providencia judicial que contiene un crédito laboral en contra del **DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI**, se observa que la solicitud se encuentra dentro de las excepciones relativas a la ejecución de créditos de carácter laboral, o de obligaciones contenidas en sentencias.

Así entonces, resulta claro que el argumento de la ejecutada según el cual sus recursos y rentas son inembargables por estar incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, no está llamado a prosperar, dado que, en este caso, estamos ante dos de las hipótesis en que no opera la regla de inembargabilidad de los recursos públicos, por cuanto la medida cautelar de embargo y secuestro decretada, busca asegurar la ejecución de una sentencia de carácter laboral proferida por esta jurisdicción y, por ende, resulta procedente para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en esa providencia, como última expresión del derecho de acceso a la administración de justicia y la realización de los contenidos que informan la garantía a la tutela judicial efectiva, con la salvedad de que no pueden ser embargados los rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias, conciliaciones y los recurso del Fondo de Contingencias.

**6.3.** En la alzada la parte ejecutada aduce que la ejecutante no cumplió con la obligación de identificar la clase de producto y los números de las cuentas bancarias del **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, sobre las cuales se pretende hacer recaer la medida cautelar de embargo.

En relación con dicho aspecto, la Sala advierte que del artículo 83 del Código General del Proceso<sup>5</sup> no se desprende que la ejecutante en su solicitud debiera especificar la clase y los números de las cuentas bancarias a embargar<sup>6</sup>, pues la norma no lo exige. Lo que establece la citada disposición es un nivel de detalle que se determina en atención a la

---

<sup>5</sup> "REQUISITOS ADICIONALES. Las demandas que versen sobre bienes inmuebles los especificarán por su ubicación, linderos actuales, nomenclaturas y demás circunstancias que los identifiquen. No se exigirá transcripción de linderos cuando estos se encuentren contenidos en alguno de los documentos anexos a la demanda.

"(...)

**"En las demandas en que se pidan medidas cautelares se determinarán las personas o los bienes objeto de ellas, así como el lugar donde se encuentran".** (Resaltado añadido)

<sup>6</sup> Circunstancia que ha avalado y ratificado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación en los siguientes términos:

"(...) la Sala considera que el Tribunal se equivocó al condicionar la admisión de la solicitud de las medidas cautelares deprecadas por el ejecutante, al cumplimiento de un requisito consistente en el señalamiento de los números de las cuentas donde se encuentran depositados los dineros de la entidad demandada, pues tal requerimiento no está previsto legalmente, ni tampoco se puede deducir de la norma aplicable al caso; luego el ejecutante no desconoció carga procesal alguna.

"Por otra parte, es imposible pretender que el solicitante tenga un conocimiento preciso y detallado de la entidad donde se encuentran radicadas los dineros depositados a nombre de la entidad que se pretende ejecutar, así como la identificación numérica de las cuentas.

"De allí que, bastará con que el Tribunal oficie a las distintas entidades financieras, señaladas por el ejecutante, para que den cumplimiento a la medida cautelar impuesta, a lo cual procederán, lógicamente, siempre y cuando aparezca que la entidad ejecutada tiene dinero depositado, situación de la que informarán al Tribunal, para los fines a que haya lugar" (auto del 2 de noviembre de 2000, expediente 17357, MP. Alíer Eduardo Hernández Enríquez).

Criterio reiterado en providencia del 3 de julio de 2019, expediente 63790, MP Marta Nubia Velásquez Rico.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76-001-33-33-007-2019-00299-01
EJECUTANTE:	JUANA YOLIMA PRECIADO QUIÑONES
EJECUTADO:	DISTRITO ESPECIAL DE CALI

naturaleza de los bienes objeto del proceso o de las medidas cautelares, ya sean inmuebles o muebles y, en ellos, según si son de género o especie, o corresponden a una universalidad, entre otros factores allí descritos.

En este sentido, el Honorable Consejo de Estado ha señalado que lo que la norma sugiere es que se brinden los datos más precisos para poder identificar los bienes sobre los cuales va a recaer la cautela, pero sin que pueda extremarse la interpretación para señalar que si no aparece esa determinación con detalle se genere una suerte de improcedencia frente a la solicitud de la medida cautelar formulada.

Así se ha pronunciado la alta Corporación<sup>7</sup>:

*“La Sala estima conveniente señalar que esta línea normativa no es asunto novedoso en el CGP; contrario a ello, el inciso cuarto del artículo 76 del Código de Procedimiento Civil –Decreto 1400 de 1970– ya traía esta consagración, y por ello, en armonía con tales postulados, esta Corporación ha sostenido, por décadas, que una identificación detallada del número de las cuentas bancarias no es requisito ni exigencia oponible a la solicitud de la medida cautelar de embargo como, al parecer, pasa por alto quien acude a tal argumento para sostener uno de los cargos de su apelación. Al respecto, viene bien recordar, entre otras providencias, que en sentencia del 2 de noviembre de 2000, expediente 17357, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, ya se habían ofrecido tales claridades, al indicar, lo siguiente:*

*“(…) En relación con el requisito de que trata el inciso cuarto del artículo 76 debe advertirse que la expresión referente a la determinación de los bienes implica, no sólo para este caso sino siempre que se pidan medidas cautelares, que se den los datos más precisos posibles para poder identificar los bienes respecto de los cuales van a recaer las medidas, pero sin que pueda extremarse la exégesis para señalar que si no aparece esa determinación con todo detalle no cabe el derecho de aquellas, pues son numerosos los eventos en los cuales es menester realizar la petición en un sentido general y esperar a la práctica de la cautela respectiva para comprobar su completa identificación. Así, por ejemplo, si se trata de embargar y secuestrar los muebles que se encuentren en el interior de una casa o local, basta enunciar el propósito de hacerlo pero sin que se le pueda exigir con detalle al solicitante su completa determinación, al igual de como sucedería si lo que se persigue son saldos bancarios, para citar otro de los muchos ejemplos que ilustran la explicación”.*

Conforme a lo anterior, no es admisible el argumento que en tales términos fue planteado por la parte ejecutada pues, se insiste, no corresponde a una carga legal que el ejecutante tenga el conocimiento minucioso de la información de las cuentas bancarias donde se encuentran depositados los dineros a nombre de la entidad ejecutada, dada la imposibilidad de tener acceso a dicha información.

En estos términos, dado que la parte ejecutante pidió que se embargaran las sumas de dinero que la entidad ejecutada tuviera en cuentas corrientes o de ahorros, que se encuentren a su nombre en las entidades financieras, BANCO DE OCCIDENTE, BOGOTÁ, SUDAMERIS, BANCOLOMBIA, AGRARIO DE COLOMBIA, POPULAR, AV VILLAS, DAVIVIENDA, BBVA, CAJA SOCIAL y PICHINCHA; dicha información se ajusta a los requerimientos del artículo 83 del Código General del Proceso.

---

<sup>7</sup> CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ, providencia del 22 de noviembre de 2021, Radicación número: 63001-23-33-000-2021-00057-01 (67357)



MEDIO DE CONTROL:  
RADICACIÓN:  
EJECUTANTE:  
EJECUTADO:

EJECUTIVO  
76-001-33-33-007-2019-00299-01  
JUANA YOLIMA PRECIADO QUIÑONES  
DISTRITO ESPECIAL DE CALI

**6.4.** Finalmente, en torno al argumento esbozado en la alzada, sobre la incompetencia del ente territorial ejecutado para cumplir con la obligación derivada de las sentencias que conforman el título base de ejecución, ha de decirse que no tiene vocación de prosperidad, dado que en esta sede judicial no está en discusión el derecho de la ejecutante, ni quién tiene a cargo la prestación que le fue reconocida, pues dichos asuntos ya fueron definidos en el proceso declarativo, y en desarrollo de este proceso ejecutivo ya no es posible volver a discutir sobre dichos temas.

En efecto, la Sala advierte que, al momento de librarse el mandamiento de pago, se determinó que el título ejecutivo base de recaudo cumple con los requisitos sustanciales en la medida en que las providencias judiciales que conforman el mismo contemplan una obligación de pago a cargo de **DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**, derivada de una condena impuesta por esta jurisdicción.

Por consiguiente, éste último planteamiento no prospera.

En consecuencia, por las anteriores consideraciones, para la Sala es imperativo confirmar el auto apelado.

Por lo expuesto, la Sala Segunda del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

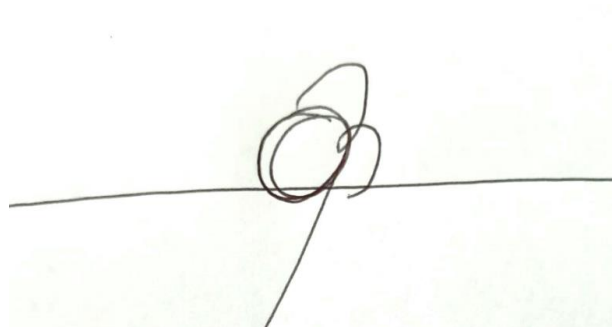
#### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto interlocutorio del 02 de febrero de 2022 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, por medio del cual se decretó una medida cautelar, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído.

**SEGUNDO:** En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

**Notifíquese y cúmplase,**

Los Magistrados,



**RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**



**JHON ERICK CHAVES BRAVO**



**FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ**